

EFICIENCIA Y DESCENTRALIZACIÓN

(Publicado en La Prensa el 4 de Julio y en El Deber el 7 de julio de 2003)

Rubens Barbery Knaut

La importancia de un proceso de descentralización radica en que logre el fortalecimiento del estado y la institucionalidad pública. La descentralización, al acercar el poder de decisión hacia el ciudadano busca, además de aumentar la participación y la accountability, mejorar la eficiencia de la administración pública bajo el principio de que “nadie mejor que el mismo interesado para conocer los problemas y las posibles soluciones que lo afectan”.

Este principio de la descentralización, si bien es cierto para ciertos niveles de la administración pública, no puede convertirse en dogma de fe puesto que una excesiva descentralización puede generar el efecto contrario, debilitando el proceso democrático y fragmentando en extremo la posibilidad de administrar coordinadamente los bienes y servicios del estado. La eficiencia de un proceso descentralizador depende –entre otros factores–, no solo del grado de involucramiento de la sociedad civil, sino también de la posibilidad de diseñar y aplicar políticas con un mínimo de coherencia entre las diferentes instancias de gobierno. La pérdida de gobernabilidad se genera también por una falta de coordinación entre niveles verticales de gobierno y no exclusivamente dentro del mismo órgano público.

La desarticulación entre niveles – cuya causa puede ser el convencimiento de que el voto democrático soluciona todos los problemas de la administración pública – produce altos costos de monitoreo y coordinación, la pérdida de las economías de escala en la provisión de algunos bienes y servicios públicos, que se constituyen, entre otros, en desventajas de un proceso descentralizador mal estructurado. Un ejemplo de esto se puede apreciar en el recientemente iniciado proceso Peruano donde cada nivel de gobierno (elegido por voto popular y directo) responde a su propia agenda política sin un mínimo de coherencia entre si.

La ineficiencia de los operadores (técnicos y/o políticos) no se resuelve a través del voto popular, paso que una vez dado es irreversible – al igual que los problemas que ello puede generar. Se deben separar, por lo tanto, los problemas de gestión de aquellos correspondientes a la legitimidad de las autoridades. La legitimidad del voto no garantiza eficiencia (para ejemplo basta el Gobierno Municipal de Santa Cruz). De la lectura adecuada de las causas de los problemas depende la solución que nos permita salir de la “confusión”.